

España y la crisis del euro: entre la especulación y las ideologías

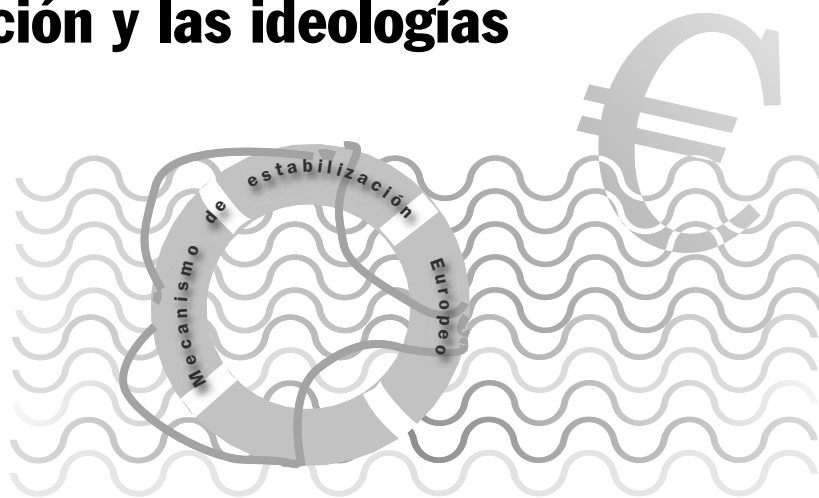
J. G. Neumann

Doctor en Filosofía del Derecho
por la Universidad de Valencia

La noche del 7 de mayo pasado, un desconcertado presidente Zapatero comparecía ante la prensa internacional en la sede de la Unión Europea, tras la cumbre de emergencia donde se estableció el rescate del euro, para negar que España negociara un paquete de ayuda financiera con el FMI. Pocos días después, previa llamada de presión del presidente Obama, anunciaba en el Parlamento español una serie de recortes en las pensiones, el sueldo de los empleados públicos y otros gastos sociales, a fin de reducir el déficit fiscal y tener acceso a los programas de rescate de la Unión Europea y el FMI.

El problema es que el presidente Zapatero demuestra una y otra vez su incapacidad de comprender la realidad más allá de sus estereotipos ideológicos, de manera que los 47 millones de españoles, a pesar del gran potencial de su economía, se encuentran atrapados entre los efectos de una voraz especulación interna y externa, y las decisiones ideologizadas de su gobierno. Lo peor es que tampoco la oposición política demuestra gran lucidez sobre lo que sucede y lo que España debe hacer como estado soberano.

Respecto a la especulación, el agravamiento de la crisis de la zona euro se ha revelado como lo que realmente es: una continuación de la ruptura de la gran burbuja financiera global que comenzó en 2008 con la quiebra de grandes corporaciones en varios países y que fue taponada temporalmente con un endeudamiento masivo de billones de dólares y euros liderado por la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE), a costa de la economía real de todas las naciones implicadas.



El epicentro de la crisis actual se sitúa en las economías estructuralmente más débiles de la zona euro: Grecia, Portugal, España e Irlanda (los denominados *pigs* por la prensa de la City de Londres), cuyo endeudamiento, déficit fiscal, recesión económica y desempleo, superan con creces los límites de estabilidad de la eurozona.

Como indicamos en un artículo anterior, *España, ¿fuera del euro?*, desde principios de 2010 se barajan en medios europeos varias alternativas. Una es la expulsión de la zona euro de estas economías en problemas. Una variante, llamada por algunos «nuclear», es el regreso a las monedas nacionales, lo que permitiría una bancarrota ordenada allí donde fuese necesario y el manejo soberano de la crisis por cada país. Otra es el «rescate» de las economías más endeudadas mediante un nuevo endeudamiento masivo, a cambio de imponerles medidas de austeridad draconianas supervisadas desde el exterior, con lo que se convertirían en simples protectorados de los centros financieros supranacionales a través del BCE y el FMI.

Esto último fue lo que se decidió en la primera semana de mayo, luego de intensos debates internos y de la resistencia de diversos sectores en Alemania y Francia, al tiempo que los «mercados financieros» aprovechaban para acumular enormes ganancias generando rumores y manipulando la mo-

neda y los valores bursátiles de la zona euro.

Mientras se volatilizaban miles de millones de euros en las bolsas de valores (el Ibex-35 español perdió en esos días cerca del 20% de su valor), el 7 de mayo los dirigentes de la Unión Europea finalmente acordaron un primer paquete de 120 mil millones de euros en tres años para el «rescate» de Grecia, un tercio de los cuales corresponderá nada menos que al Fondo Monetario Internacional, quien tendrá un papel clave en la supervisión de los «programas de ajuste». (Ya se sabe en Iberoamérica lo que eso significa).

El ojo del huracán se ha centrado entonces en España, cuya economía —y su eventual hundimiento— equivale a cuatro veces el de Grecia. Dos días después, el 9 de mayo, la Unión Europea decidió sacar su artillería pesada para contrarrestar los ataques concertados contra el euro: se acordó un fondo multimillonario de 750 mil millones de euros para el rescate de las economías endeudadas, un tercio aportado por el FMI; la creación de un Mecanismo de Estabilización Europeo (SPV en sus siglas en inglés) y, en contra de lo establecido por la normativa europea, la intervención del BCE para la adquisición de deuda pública y privada de sus países miembros.

El centro del asunto es que el «rescate» no es para reactivar sus economías sino para salvar a los bancos acreedo-

res. No es para expandir la producción y el empleo, y con ello el ingreso fiscal y la recuperación económica, sino, por el contrario, para exprimir al máximo a familias, empresas e instituciones en un proceso de saqueo económico que tiende a hacer ingobernable al país que lo padece y, en definitiva, a agravar el problema. Así lo consideraba *Le Monde* al calificar el mega paquete de rescate como «un tratamiento de choque que no lo arregla todo».

Por supuesto se deben reordenar las finanzas y el gasto público, pero no sacrificar a la población para salvar una burbuja financiera privada en bancarrota. Gran parte de la deuda es ficticia, como se demostró en Grecia con la revelación de las manipulaciones de Goldman Sachs con las autoridades económicas griegas, y en España, con los negocios del estafador Madoff y el Banco Santander, entre otros. Debido a la desregulación financiera, existe una creciente fusión y confusión entre los bancos comerciales y de crédito para las familias y las empresas, y los fondos especulativos dedicados a toda suerte de estafas legalizadas incluyendo los activos «tóxicos». Es decir, entre el ahorro y la deuda legítima, y la usura a gran escala.

Lo que suceda ahora depende en gran medida de los gobiernos. En España, en los últimos años, mientras la crisis avanzaba, el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero no sólo negaba la crisis sino que se distraía en consolidar su proyecto de ingeniería social y cambio de valores, propio de una trasnochada ideología supuestamente progresista, para lo cual ha contado además con todo un aparato mediático y político que lo respalda.

Por ejemplo, su proyecto de realizar una «nueva transición» española, reviviendo la parábola trágica de la guerra civil y la dictadura franquista, cuyo

final en los años 70, con la transición a la democracia, no se habría saldado convenientemente. De aquí su ley de Memoria Histórica. Por ello no es extraño que en los discursos del pasado 1º de mayo, las centrales sindicales, aliadas del gobierno, orientaran sus protestas a la necesidad de juzgar los crímenes de Franco, cuando tres días antes se había anunciado la cifra oficial del paro, que alcanza ya cerca de 5 millones de desempleados.

O su política de profundizar los nacionalismos regionales y la división del país en Autonomías, en alianza con los sectores nacionalistas más radicales, lo que ha aumentado el dispendio del Estado y la multiplicación de funciones e instituciones en las 17 Autonomías, con medios de comunicación y políticas lingüísticas propias para reforzar sus identidades, llegando algunas de ellas a tener sus propias representaciones exteriores en numerosos países. Se calcula que la mitad de los gastos del Estado y su necesario endeudamiento procede de las administraciones autonómicas y municipales.

En lugar de una reestructuración de la economía fundamentada en ciencia y tecnología para abrir el potencial de la juventud española al siglo XXI, el gobierno de Zapatero se empeña en debates y controvertidas decisiones políticas sobre la ideología de género, el ministerio de la Igualdad, la extensión del aborto como «derecho» a las jóvenes de 16 años sin el consentimiento de sus padres, por ejemplo, e innumerables tópicos por el estilo. Por ello se ha esforzado sin éxito en promover en la Unión Europea cosas como la paridad de género o la propiedad artística en internet, en vez de utilizar su papel como presidente semestral europeo para articular la necesaria regulación financiera, la separación de la actividad bancaria legítima de los fondos de inversión especulativos, el cierre de los

paraísos fiscales y otras medidas urgentes para salvar las economías de la región.

Uno de los estereotipos gubernamentales que más está afectando la economía española es su ecologismo primario. Por ejemplo, mientras la bolsa de valores se derrumbaba el pasado 3 de mayo por la inacción del gobierno, el presidente Zapatero se encontraba ocupado en una reunión sobre cambio climático. Enormes recursos oficiales se dedican a la subvención de las comprobadamente ineficientes energías renovables. Grandes extensiones de territorio están sembradas de paneles solares y molinos eólicos. Al tiempo que se trae gas de Argelia a través del Mediterráneo y se compra electricidad a Francia (producida por energía nuclear), el gobierno de Zapatero está empeñado en cerrar las pocas centrales nucleares que aún quedan. De esta manera, la electricidad en España para las familias y las empresas es una de las más caras del mundo, con efectos desastrosos en la productividad y competitividad.

En definitiva, con estos antecedentes es difícil suponer que el presidente Zapatero pueda enfrentar con lucidez y decisión el huracán financiero en cuyo epicentro se encuentra ahora España y que puede dismantelar el artificial sistema del euro, convertir a las naciones en protectorados bajo supervisión y a sus gobiernos en administradores de una brutal austeridad para sus pueblos. Tampoco se vislumbra hasta ahora el liderazgo que se requiere en otros grupos de la oposición, entrenados como están en los dogmas del neoliberalismo económico. Corresponde a los ciudadanos organizados la lucha contra la especulación y la superación de las trampas ideológicas de izquierdas y derechas, la defensa de la vida y la reestructuración de la economía productiva.